



Con base en un dato parcial, el número de afiliados al Seguro Social, el presidente Enrique Peña Nieto frenó momentáneamente la caída de sus índices de aprobación. Sin embargo, sus cifras y su discurso propagandístico no resisten un análisis serio ni representan una súbita recuperación económica.

CARLOS ACOSTA CÓRDOVA

En el mundo fantástico en que parece vivir el presidente Enrique Peña Nieto no hay boquetes mortales en carreteras, producto de la corrupción. Tampoco desaseos electorales que frustren aspiraciones ciudadanas y pongan en entredicho la credibilidad de las instituciones electorales.

En ese mundo mágico tampoco hay una justicia blandengue que no acierta a poner en su lugar a exgobernadores expoliadores del fisco, impunes, cómplices

de delinquentes y corruptos sin límite.

Por el contrario, en el mundo feliz de Enrique Peña Nieto y su corte, todo marcha sobre ruedas y es él mismo quien enfáticamente, y a cada rato, se encarga de dar siempre la "buenas nuevas".

Meses lleva ya diciendo, festejando, la gran creación de empleos. Hace dos semanas aseguró que la suya ha sido "la presidencia del empleo", pues en lo que lleva de su administración se han creado "2.8 millones de empleos formales nuevos", hecho que —dice— no se ha registrado en ningún otro sexenio en la historia del país, mucho menos en el anterior, en el

que, por el contrario, se registró una pérdida neta en el área.

Según su discurso, la economía mexicana está más fuerte que nunca; no ha dejado de crecer —a finales de mayo el INEGI informó que en el primer trimestre de este año la economía creció 2.8% respecto de igual trimestre del año previo— y nunca ha perdido atractivo para la inversión extranjera.

Pero lo que más beneplácito causó en el gobierno federal, y regocijo franco en la Secretaría de Hacienda, fue el dato de que la calificadora internacional Standard & Poor's Global Ratings (S&P) mejoró la perspectiva de las calificaciones para la economía mexicana.

En agosto del año pasado S&P causó un gran revuelo en el medio financiero nacional —y sus consecuencias: volatilidad del tipo de cambio, depreciación del peso, fuerte salida de inversiones de cartera, incertidumbre, desazón de las autoridades— porque decidió cambiar de "estable" a "negativa" la perspectiva de la calificación crediticia internacional de México, debido a las altas probabilidades de que siguiera aumentando desproporcionadamente la

deuda gubernamental, a tal grado que el nivel de la deuda o la carga de los intereses significaran un incremento en la vulnerabilidad de las finanzas públicas.

Y bajar la perspectiva de estable a negativa significaría que en menos de 24 meses la calificadora bajaría las calificaciones soberanas de México en moneda extranjera de largo y corto plazo en escala global, de "BBB+" y "A-2" respectivamente, que significan una capacidad adecuada para cumplir con los pagos de la deuda, aunque con condiciones económicas adversas.

Sin embargo, no se cumplía un año siquiera de ese plazo y S&P rectificó: la semana pasada, el martes 18, no sólo mantuvo las calificaciones soberanas de México en moneda extranjera de largo y corto plazo en escala global, en "BBB+" y "A-2", sino que volvió a poner en "estable", desde "negativa", la perspectiva de dichas calificaciones.

La razón: se redujeron los riesgos en materia de deuda y de pasivos contingentes para los próximos 24 meses. Además, consideró S&P, las autoridades reaccionaron pronta y eficazmente ante los recientes choques negativos como los del tipo de cambio. También, la perspectiva estable "refleja la mejora del balance fiscal de México", dijo la calificadora el martes 18.

Quizá por la persistencia de ese discurso triunfalista, que se repite en radio, televisión y en cuanto medio se pueda, es que Peña Nieto, contra todos los negativos que carga —la corrupción en primerísimo lugar—, ha logrado subir un poco en las encuestas de popularidad.

De acuerdo con encuestas del diario *Reforma* publicadas el jueves 21, la víspera de su cuarto informe de gobierno, en agosto pasado, sólo 23% de los ciudadanos aprobó la forma en que Peña Nieto estaba haciendo su trabajo. Un 74% lo reprobó.

En enero de este año, el mes del brutal gasolinazo que enojó a toda la población, cayó a un histórico 12% de aprobación ciudadana, sin precedente en la historia reciente del país, con un rechazo de 86%.

Pero para este mes de julio, quizá por la fuerte y triunfalista metralla discursiva, Peña Nieto repuntó a un 20% de aprobación ciudadana... aunque no cedió mucho la desaprobación, que alcanzó 78%. Un logro pírrico que no alcanza a ocultar la retórica tramposa, que abusa de las verdades a medias, magnifica logros y minimiza problemas.

Es cierto que se han generado más empleos formales, pero no todos son nuevos ni de mayor calidad ni están mejor remunerados. Los datos del IMSS señalan que muchos de los empleos que el presidente dice que son nuevos, en realidad ya existían, pero por los incentivos expresos a empresarios pequeños y a todos aquellos que tributaban en el antiguo régimen

fiscal de pequeños contribuyentes y que hoy están en el Régimen de Incorporación Fiscal, por supuesto que hay más empleos formales.

Que haya más empleos no quiere decir que está en jauja el mercado laboral mexicano. Los datos oficiales (Inegi, Coneval) son contundentes: ha crecido el porcentaje y el número de personas que ganan muy poco y se ha reducido el de quienes ganan más.

El problema del discurso presidencial es que, para maximizar un logro, sólo toma una parte de la realidad: los trabajadores asegurados en el IMSS son sólo una porción de un universo mucho más grande. Por ejemplo, en junio de 2011, el quinto año de gobierno de Felipe Calderón, había 15.1 millones de trabajadores asegurados en el IMSS, que era apenas 31% de la Población Económicamente Activa (PEA) y el 33% de la Población Ocupada.

En junio del quinto año de gobierno de Peña Nieto, el número de asegurados en el IMSS fue de 19 millones 134 mil 58 personas, que significaban 36% de la PEA y 37% de la Población Ocupada.

Es un avance, ciertamente, pero no disminuye sustancialmente la tasa de informalidad laboral: 59.2% (de la población ocupada) en el primer trimestre 2011 contra el 57.2% en el mismo lapso de 2017.

Para hacer más visible el subempleo, es decir, la situación de millones de personas que tienen un trabajo pero que les resulta insuficiente y quisieran trabajar y obtener más ingresos, el Inegi usa lo que llama Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación.

La define como el "porcentaje de la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, más la que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo (menos de 2 mil 401.2 pesos) y la que labora más de 48 horas semanales y que ganan hasta dos salarios mínimos (4 mil 802.4 pesos) al mes".

En esa condición se hallaba, al primer trimestre de este año, el 14.4% de la población ocupada, es decir, 7.5 millones de personas. En el primer trimestre del quinto año de gobierno de Calderón esa Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación era de 12% y significaba 5.5 millones de personas. El salario mínimo entonces era de 58.06 pesos diarios, mil 741.8 pesos al mes. Queda a deber, pues, Peña Nieto.

Banxico, el salvavidas

En términos de calidad, los trabajos en este sexenio no son mejores que los de la administración pasada, por más que ésta padeció la gran recesión de 2008-2009 que hizo desplomarse en más de 4% a la economía del país.

Para comparar, con datos del INEGI, se puede decir que, en el primer trimestre del quinto año de gobierno de Felipe Calderón, de una población ocupada de 46 millones 5 mil 815 personas, unos 29.6 millones de trabajadores (el 64.4%) no contaban con acceso a ninguna institución de salud pública.

En el primer trimestre del quinto año de gobierno de Peña Nieto, tenían traba-



Subempleo. Cifras alegres

Trump, más “pragmático” que amenazante en la renegociación del TLCAN

J. JESÚS ESQUIVEL

WASHINGTON.- Los objetivos de Donald Trump para la renegociación del TLCAN, la que arranca el próximo 16 de agosto, son menos proteccionistas de lo que amenazaba el mandatario de Estados Unidos, y el nuevo acuerdo no podría aprobarse en el Congreso de ese país sino después de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto, advierte Luis de la Calle, uno de los expertos del consejo asesor de los negociadores mexicanos.

El pasado lunes 17, Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca (USTR), entregó al Capitolio el sumario con los 22 objetivos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que Trump desea renegociar, los cuales resultaron ser más pragmáticos que proteccionistas.

“Los objetivos son positivos porque son congruentes con la Autoridad de Promoción Comercial (APC), que es la ley que en estos momentos rige el comercio en los Estados Unidos. Son objetivos pragmáticos y están lejos de ser proteccionistas”, afirma en entrevista De la Calle, negociador del tratado original.

Dicho sumario perfila una renegociación con Canadá y México más institucionalizada de lo que hubiese querido Trump. “Cuando lees los objetivos, técnicamente muchos de ellos son naturales para una negociación comercial y congruentes con lo que pudieran esperar Canadá y México”, subraya el experto.

Agrega: “En la redacción de la introducción vuelven a insistir en que Estados Unidos está perdiendo, que hay que corregir el déficit, y tiene una especie de amenaza cuando dice, al final de la introducción, que si no cumplimos con los objetivos, la transición del comercio no será fluida”.

En la introducción del sumario, que a decir de De la Calle pudo escribir Steve Bannon (uno de los principales asesores del gobierno estadounidense) en acuerdo con Trump, sobresale la afirmación de que el TLCAN está desfasado y lo responsabiliza del déficit, aunque reconoce que, gracias a ese acuerdo, agricultores y rancheros estadounidenses tienen acceso a mercados internacionales.

“El TLCAN creó problemas para muchos estadounidenses desde que entró en vigor en 1994: el déficit comercial explotó, miles de fábricas cerraron y millones de estadounidenses se quedaron sin empleo”, se subraya en la segunda página.

El 1 de enero de 1994, cuando se imple-



Trump. Sólo alardes

mentó el TLCAN, Estados Unidos gozaba de un superávit comercial de mil 300 millones de dólares con México; en la actualidad, como destaca la introducción, el balance se transformó en un déficit de 64 mil millones de dólares.

Trump puede sacar a su país del TLCAN, pero no puede imponer medidas proteccionistas en la renegociación ni tratar el asunto de forma bilateral con Canadá y México, como pretendía, ya que está acotado por la APC. En consecuencia, de acuerdo con De la Calle, sólo cuatro asuntos son de preocupación para México y Canadá.

El primero es la reducción del déficit. El segundo, la mencionada “amenaza velada” sobre la fluidez comercial. “Si tenemos éxito en alcanzar estos objetivos, manteniendo y mejorando el acceso a los mercados para agricultores, manufactureros y proveedores de servicios, estaremos ante una transición fluida hacia el nuevo TLCAN”, se destaca en el último párrafo de la introducción redactada por la Casa Blanca.

La tercera preocupación es la eliminación del Capítulo 19 del tratado, que permite el arbitraje internacional en casos de *dumping*. “Ellos (Trump y Bannon) quieren que se elimine. La negociación no ha empezado. Las disputas en materia de *dumping* tendrían que dirimirse en los tribunales domésticos y, como es recíproco, también en México y Canadá”, explica De la Calle.

Sin embargo, este objetivo de Estados Unidos se

dirige más a su relación con Canadá que a la que tiene con México, ya que los dos primeros mantienen una añeja disputa comercial sobre la industria maderera.

La cuarta preocupación identificada por De la Calle es que la Casa Blanca pretende que no se excluya a México y a Canadá de las salvaguardias globales en casos de demandas de Estados Unidos.

Al respecto, el entrevistado explica: “Si Estados Unidos hace una investigación para la importación de acero, por el TLCAN México y Canadá pueden ser excluidos de esa investigación global contra todo el mundo por virtud del tratado. Lo que Trump quiere es que se investigue a Canadá y a México en todos los casos en los que se investigue a todo el mundo.”

“Esos cuatro objetivos de Trump acabarían con algunos de los avances que se habían logrado en el TLCAN hace 25 años”, destaca.

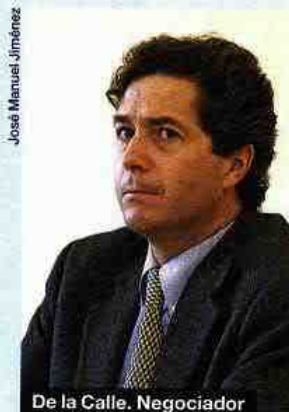
También comenta que Trump incluyó entre sus objetivos que Canadá y México acepten “criminalizar la corrupción gubernamental”.

Al respecto dice el asesor del equipo negociador mexicano: “Requerimos la adopción o mantenimiento de condiciones por parte de las compañías para que mantengan actualizados sus libros financieros, lo que facilita el rastreo de pagos por cohecho; que se aliente el establecimiento de códigos de conducta para la adopción de altos estándares de ética entre los servidores públicos, y que se requiera a las partes anular la deducción de impuestos por pagos relacionados con la corrupción”.

Sin embargo, De la Calle dice que México debe avanzar en esa materia con disciplina interna y compromisos internacionales:

“No vamos a caer en actos de corrupción que sean sancionados por el TLCAN. Si se tiene el caso de un mexicano que comete esos actos en Naucalpan, debe haber un componente internacional, relacionado con América del Norte para que sea sancionable bajo el TLCAN.”

“Eso es útil y tenemos la necesidad de avanzar en materia de corrupción, pero los estadounidenses también



De la Calle. Negociador

Reuters/Patrick Gries



Lighthizer. Mesura

y, por cierto, más en este gobierno de Trump."

Plazos

Bajo el Acta de la Vía Rápida (*Fast Track*), el Poder Ejecutivo de Estados Unidos tiene 30 días para informar al Congreso de sus objetivos en una negociación internacional de comercio. En ese plazo y antes de que comiencen en este caso las renegociaciones, el Capitolio no puede hacer enmiendas a las propuestas de Trump; por ello el USTR indicó en el documento que las pláticas con Canadá y México se inician el próximo 16 de agosto.

Por lo complicado de los temas no se espera un nuevo acuerdo antes de la primavera de 2018, y abril y mayo serán meses preelectorales en Estados Unidos, ya que el 6 de noviembre se renovarán las 435 curules de la Cámara de Representantes y 33 de los 100 escaños del Senado.

Para aprobar el nuevo acuerdo se requieren 218 votos en la Cámara de Representantes y dos tercios de los senadores. El encono entre legisladores demócratas y republicanos hace prever que no someterán a votación el nuevo TLCAN.

Por eso De la Calle considera un error que el gobierno mexicano negocie con Trump y no con el Congreso de Estados Unidos, pues las elecciones legislativas de ese país en 2018, y no las presidenciales de México, son el principal obstáculo para sacar el acuerdo lo antes posible.

Firmarlo "antes de noviembre de 2018 tiene probabilidad casi cero. Para lograrlo tendrías que terminar rápidamente unas negociaciones para que el resultado se vote en la primavera de 2018, pero eso no es posible bajo las leyes de la APC, porque hay tiempos de espera. Antes se tiene que emitir el reporte de la Comisión Internacional de Comercio estadounidense sobre lo negociado.

"El calendario legislativo de Washington te llevaría a septiembre de 2018 y en ese mes está en marcha la campaña, entonces no lo van a votar y pasa a noviembre. Ese mes difícilmente lo van a someter a votación, se va hasta enero de 2019 o después... y ya no le toca a Enrique Peña Nieto." ●

jo 51.9 millones de personas, de ellas 32.4 millones (62.4%) estaban igual: sin acceso a servicios de salud en instituciones públicas.

Por otra parte, es cierto que la economía presenta menos sobresaltos, pero no por gracia de las autoridades hacendarias, ni por un manejo responsable y transparente de las finanzas públicas por parte de aquéllas, sino porque la suerte ha acompañado tanto a Luis Videgaray como a José Antonio Meade, que han recibido sumas generosas e históricas del Banco de México por concepto de su remanente de operación.

En abril de 2016, el Banco de México entró a la Tesorería de la Federación 239 mil 94 millones de pesos, producto de su remanente de operación, que resultó abultado, como nunca, por la masiva venta de dólares que el banco central hizo en 2015 ante la extraordinaria demanda que hubo en el año.

Para ordenar el mercado y abatir un tipo de cambio tan alto que no se correspondía con los fundamentales de la economía, el banco vendió enormes cantidades de dólares a precio alto y, por tanto, recibió millonadas de pesos que luego, apartados los montos para sus gastos de operación y proteger sus reservas contables, debió por ley entregar al gobierno federal.

Feliz se le vio a Luis Videgaray, entonces todavía secretario de Hacienda, pues por ley 70% de ese dinero tendría que dedicarse a reducir la deuda pública... que él ya la había aumentado en casi 10 puntos porcentuales del PIB de como la

recibió de la administración anterior.

Igual pasó con José Antonio Meade, el sucesor de Videgaray. Después del gasolinazo de enero de este año, Meade vivió una de las peores épocas de su larga trayectoria en la administración pública. Nunca dimensionó la reacción de la gente ante el aumento brutal en los precios de las gasolinas y el diesel.

Caminaba cabizbajo, como arrastrando la cobija –el reportero estuvo con él en los primeros días de enero– y no lo calentaba ni el sol. Las consecuencias del gasolinazo habían sido devastadoras, no sólo por el repudio popular, sino porque desató una inflación que en junio llegó a 6.31% –apenas menor al 6.53% de diciembre de 2008, en plena crisis financiera internacional– y que, según especialistas, todavía no llega a su punto máximo para empezar a declinar y converger hacia la meta tradicional de Banxico de 3% más una variabilidad más o menos de un punto porcentual.

Pero Meade recuperó la sonrisa y los ánimos cuando se enteró de que el remanente de operación del Banco de México por el ejercicio de 2016 sería mucho mayor al que recibió Videgaray. Banxico entró a la Tesorería de la Federación 321 mil 653 millones de pesos en marzo pasado. Una cifra como caída del cielo que pondría feliz a cualquier secretario o ministro de finanzas del mundo.

Y otra vez, como dicta la ley, 70% de esos recursos se tienen que ocupar para aligerar la carga de la deuda. Por eso, hoy el secretario de Hacienda y en general el gobierno federal, henchidos de gusto y haciendo caravana con sombrero ajeno (el de ▶

Miguel Dimas yuga



Feria del Empleo. Asistencia masiva

Coparmex: ocupación y sistemas anticorrupción no son méritos del gobierno

JUAN CARLOS CRUZ VARGAS

A parte del avance que constituyen las reformas estructurales aprobadas a principios de la administración de Enrique Peña Nieto, las cuales fueron aplaudidas por el sector privado, el actual gobierno se empantanó en la corrupción y la inseguridad, dice en entrevista el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther.

"Nos preocupa cómo en este sexenio —no particularizo en personas, hablo de un tema sistémico—, la corrupción ha crecido de una forma exponencial. Nos preocupa muchísimo que, de la mano con esta corrupción, la impunidad y la percepción de la misma también han crecido."

Impulsor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) junto con el Instituto Mexicano para la Competitividad y la organización no gubernamental Transparencia Mexicana, el dirigente patronal destaca que en seguridad pública el gobierno federal no ha logrado avances sustantivos.

"Si no pasa un pequeño milagro", apunta, este año finalizará como el más violento, aun por encima de 2008, que registró la mayor cantidad de homicidios dolosos.

Otro de los asuntos pendientes del gobierno federal, a su juicio, "es que hubo actos que hacen presumir violación de derechos humanos en temas como el del espionaje telefónico y como la desaparición de jóvenes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero". Pero además ese fenómeno puede

asociarse con otros delitos, como "violación del derecho de privacidad, el ataque o intimidación de los medios de comunicación, incluyendo en esta parte la falta de persecución de algunos delitos que hacen presumir violaciones graves a los derechos humanos".

Y en la parte financiera, precisa, "nunca hemos estado de acuerdo con el extraordinario endeudamiento en el que ha incurrido esta administración. Tampoco en la política de desarrollo social, con la opacidad en el diseño y la administración de sus programas".

En fin, resume que la Coparmex ha manifestado en diversas ocasiones sus diferencias con el gobierno federal "en materia de obra pública, con el marcado favoritismo con que se han ejecutado. Desde luego, no hemos estado de acuerdo con la lentitud en la implementación de la reforma educativa ni con la política fiscal del gobierno, que ha pasado la factura a las empresas y ha rehusado tomar decisiones estructurales para ampliar la base de contribuyentes".

Por esas posturas, la Coparmex no ha tenido una relación complaciente con el gobierno. En enero pasado el organismo, que agrupa a más de 36 mil empresas dentro de 67 centros empresariales a nivel nacional, rehusó sumarse al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto. Argumentó que "el documento no fue consensuado debidamente".

Oficialmente, dicho acuerdo pretendía impulsar los proyectos de inversión

programados para 2017 y 2018; fomentar nuevas inversiones; mantener la creación de empleos, el crecimiento económico y la competitividad.

La Coparmex creó su propio plan para impulsar la economía familiar, crear empleos de calidad, mejorar las finanzas públicas, promover el Estado de derecho y combatir realmente la corrupción.

De Hoyos indica: "No damos cheques en blanco a ningún gobierno; no lo dimos en el pasado y no le daremos a éste ni al que sigue". Por el contrario, dice, la Coparmex valora cada política pública, toda acción de gobierno y de otras circunstancias por separado.

"Podemos defender las políticas públicas que nos parecen acertadas, no importa el color del gobierno que las proponga y las ejecute... Y también sabemos desmarcarnos cuando encontramos una política pública o una acción de gobierno que nos parece desafortunada. En ese sentido, la relación con el gobierno ha tenido momentos de gran entendimiento y momentos de profundo desencuentro.

"Una organización empresarial que no está dispuesta a analizar o cuestionar una política pública está renunciando a una de sus tareas fundamentales, que es darle voz a cada uno de los empresarios, especialmente a los más pequeños."

Lo que le falta al SNA

Acerca del SNA y los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), que entraron en vigor



Eduardo Miranda

Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, celebran la "buena conducción" de las finanzas públicas, la "responsabilidad" en el manejo de la deuda pública —que Videgaray dejó arribita del 50% del PIB— y los "esfuerzos" en la consolidación fiscal comprometida con instancias internacionales. Por eso la medallita de S&P.

Pero a pesar del generoso remanente del Banco de México —casi 661 mil millones de pesos en los dos últimos años—, Meade está cometiendo el mismo error que en 2012, cuando de repente fue nombrado secretario de Hacienda por el entonces presidente Calderón, cuando ya el paquete económico para ese año había sido entregado al Congreso.

Esta vez él lo entregó, pero recibió el nombramiento cuando el paquete econó-

el pasado miércoles 19, el dirigente de la Coparmex afirma que representan "un avance de años luz", aunque enfrentó muchas reticencias políticas.

"En todos los partidos hemos encontrado legisladores en favor del SNA y también profundas resistencias, sobre todo para que el sistema tenga dientes y quede bien estructurado". Dice que algunos gobernadores quisieron madruguar y hacer sistemas anticorrupción a su medida, como ocurrió en Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz.

—¿Qué hace falta para dotar de dientes al SNA?

—Hoy tenemos la raíz de los dientes. Sin eso no hay autoridad que actúe. Lo que no tenemos son las instituciones conformadas óptimamente para enjuiciar los casos individuales y resolverlos. No hay fiscal anticorrupción ni magistrados especializados.

"Sí puede operar, de manera imperfecta, porque el procurador general de la República puede ejercitar cualquiera de las acciones que corresponden a sus subordinados, y también es cierto que el Tribunal de Justicia Administrativa puede habilitar a un magistrado transitoriamente para que atienda casos de corrupción. Pero son situaciones de excepción, no se han conformado los órganos especializados que nos interesan."

De Hoyos celebra que haya sido la ciudadanía quien propusiera la reforma constitucional para los SLA: "Es la primera vez que la propuesta ciudadana se convierte en 32 propuestas locales. Este proceso está plagado de muchas primeras veces y nos sentimos muy contentos de lo que se ha conseguido, conscientes de que hay cosas que se deben corregir".

El gobierno no crea empleos

Sobre el anuncio de Peña Nieto a principios de este mes, de que se creó medio millón de empleos en el primer semestre del

Benjamín Flores



Hoyos Walter. Severa crítica

año, el dirigente empresarial aclara: "Los empleos, salvo los de la burocracia, no los crea el gobierno. Éste, en el mejor de los casos, reporta cifras de lo que pasa en la economía... No es un mérito que pueda atribuírsele, al menos directamente, a la acción del gobierno."

"En segundo lugar, me parece que el gobierno pudo hacer mucho más para promover la inversión, lo cual trae de la mano mayor empleo. ¿Cómo? Con una política fiscal promotora y no como ha sido, recaudadora en extremo y concentrada en muy pocos contribuyentes. Dicho esto, como país tenemos un reto muy importante para crear muchos más empleos, no son suficientes, y desde luego debemos crear empleos con mejor remuneración."

—¿Qué hacer con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami)?

—Para empezar tiene que transparen-

tar su trabajo. Proponemos que todas las deliberaciones de la Conasami y todos los estudios sean públicos. Ahí se ha formado una especie de isla dentro de la gran transformación que ha habido en instituciones del Estado mexicano, y todavía existe una práctica medieval donde se cierran las puertas del castillo y adentro se arreglan las cosas.

—¿Y qué hacer con el rey de ese castillo, Basilio González Núñez, quien lo ha gobernado desde 1991?

—La comisión necesita un tratamiento mayor, cuyo ingrediente terapéutico fundamental sea la transparencia. En la medida que se conozca con claridad cuáles son los estudios, quién los hizo y cómo se ve desde la Conasami la política oficial para el desarrollo económico. Esa medida va a aportar bastante al conocimiento y maduración de esa entidad. ●

mico ya estaba impreso y no tuvo injerencia en su confección. El error fue que, por razones políticas, decidió aplicar el más escandaloso subsidio a las gasolinas, superior a los 240 mil millones de pesos, en 2012, año de elecciones presidenciales.

Igual lo está haciendo hoy. Está subsidiando las gasolinas —no tanto en beneficio de los consumidores como de los empresarios, los importadores y los expendedores, sean nacionales o extranjeros— por vía de rebajas en el Impuesto Especial a la Producción y los Servicios, el IEPS.

La semana pasada, un punto de acuerdo de diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso obligó a la Secretaría de Hacienda a entregarles un informe sobre el precio de las gasolinas

en lo que va del año y los temas adyacentes, como impuestos, costos, transporte y demás.

En síntesis, Hacienda reconoce que recaudará este año mucho menos ingresos por concepto de IEPS porque ha tenido que estar bajando ese impuesto a los empresarios como fórmula para "suavizar los cambios en el precio público" de los combustibles.

La información que entregó Hacienda a la Permanente señala que el año pasado recaudó un promedio de 20 mil 90 millones de pesos al mes por concepto de IEPS, con lo que alcanzó en el año una recaudación total de 250 mil 900 millones de pesos.

Este año, en cambio, la recaudación mensual por IEPS ha sido de 6 mil 350 mi-

llones de pesos en promedio: 14 mil 550 pesos menos que el promedio mensual del año pasado.

El problema es qué va a hacer Meade el próximo año, porque todo indica que no habrá ningún remanente de operación generoso del Banco de México —a menos de que se complique la renegociación del TLCAN o suceda algo extraordinario en los mercados internacionales que dispare el valor del dólar—; la economía sigue creciendo, sí, pero al ritmo más mediocre de las últimas décadas.

Por lo menos el recorte al gasto público ya está anunciado. Habrá que ver si se anima el gobierno en año electoral. O se regresa al expediente de más deuda pública. Total, ya se van. Será problema de los que vengan. Es su lógica. □